

TRIBULACIONES EN LA UNION INDIA

Uno de los países del Extremo Oriente cuya situación inspira mayores preocupaciones es la India, donde se advierten señales muy significativas de un ambiente prerrevolucionario capaz de sumergirla en un estado de turbulencia análogo al de las naciones del Sudeste asiático. Efectivamente, existe en el inmenso país un primordio de acción guerrillera, a cargo de grupos armados de filiación maoista, que se viene prolongando desde hace tres años y cuyas actividades no sólo no han sido desbaratadas en su foco inicial, el Estado de Bengala occidental, sino que se han propagado a otros siete Estados de la Unión. Prosigue al mismo tiempo, la guerra endémica mantenida por Nueva Delhi con las tribus fronterizas, Naga y Mizo, que aspiran a la secesión y continúan los sangrientos enfrentamientos causados por motivos religiosos o lingüísticos, los cuales devastan periódicamente el territorio del subcontinente. En definitiva, todo hace pensar que el panorama indio se está deteriorando gradualmente.

Desde hace tres años, Bengala occidental viene siendo el epicentro de un movimiento revolucionario de amplias dimensiones—una auténtica insurrección comunista—que está sacudiendo a la India. Inspirados en el precedente de Telengana, en el Estado de Uttar-Pradesh—donde, por vez primera, los campesinos amotinados ocuparon las tierras dando muerte a más de dos mil personas—bandas armadas comunistas entraban en acción a primeros de marzo de 1967 en Naxalbari—distrito situado al Norte de Bengala, en los contrafuertes del Himalaya—expropiando las tierras, apoderándose de las reservas de cereales e izando la bandera roja en más de 25 aldeas y ciudades, algunas con más de ochenta mil habitantes. Este movimiento insurreccional de vastas proporciones estaba inspirado por la fracción marxista-leninista (pro China) del partido comunista y dirigido directamente por su jefe, Kanu Sanyal, que acaudillaba un numeroso grupo armado. En los primeros momentos, el grueso de estos rebeldes estaba compuesto, esencialmente, de miembros de las tribus

montañesas (Santhals, Ragbanshis y Araóns) más afines a las de Assam o Birmania que a los habitantes de las planicies de Bengala. Pero, al mantenerse la rebelión durante semanas, las filas de los insurrectos fueron engrosándose con muchos campesinos bengalíes, llegando a adquirir alarmantes proporciones. Tras de una primera expedición policíaca, enviada para restablecer el orden, las autoridades adoptaron una actitud pasiva, limitándose a dirigir constantes llamamientos para que depusiesen su actitud levantisca, sin despertar eco alguno entre las huestes revolucionarias que proseguían en sus desmanes. Pekín se apresuró a alentar esta actitud y, en un artículo de la Agencia «Nueva China», de 27 de junio de 1967, se definían las verdaderas características e implicaciones del movimiento al afirmar que «una base de la lucha armada de los campesinos, dirigida por los revolucionarios del partido comunista indio, ha sido establecida en el campo. Es una potente chispa del fuego de la lucha armada revolucionaria desencadenada por el pueblo indio inspirado en el pensamiento de Mao Tse-tung. Los revolucionarios del partido comunista indio en la subdivisión de Naxalbari, que preconizan la toma del poder político mediante la lucha armada, han iniciado la preparación en 1965 armando a los campesinos y estableciendo bases rurales. Durante estos dos últimos años se han esforzado en movilizar y organizar a los campesinos y después de las cuartas elecciones generales, que tuvieron lugar a principios del mes de marzo de este año en la India, han ido a Naxalbari y otras poblaciones para dirigir a los campesinos en la lucha armada para posesionarse de las tierras. Así, han tomado el camino de la revolución china». El desencadenamiento de esta acción tenía, entre otras consecuencias, el enfrentamiento entre el partido comunista ortodoxo, pro soviético, que criticaba el levantamiento, y la fracción pro China. Incluso en el seno de esta última, se creaba un cisma que amenazaba con la escisión ya que algunos dirigentes, como Hare Krishnan Konar, uno de sus más directos líderes, que al principio, habían alentado la acción de Naxalbari, se apresuraron a condenarla, reclamando la vuelta a la legalidad, al ver la oleada de indignación que levantaban los desafueros de las bandas armadas y las críticas de los compañeros de Gabinete, puesto que el partido pro chino tenía representantes en el Gobierno de Bengala occidental en el cual Konar era ministro de Agricultura. Una acción de esta naturaleza amenazaba con desmoronar el «frente unido» de la izquierda que se mantenía en el poder en el Estado proporcionando al partido inestimables oportunidades de extender su influencia. No obstante, Konar y otros dirigentes opuestos a la «línea aventurera», tal como la calificaba Moscú, eran, a su vez, tachados de «neorevisio-

nistas a sueldo de los terratenientes y del imperialismo» por aquellos de sus compañeros que habían escogido la lucha armada. En Bengala se había llegado a una situación inquietante en la cual las propias masas comunistas estaban divididas en tres fracciones, de diversa inspiración, que se combatían mutuamente y no tan sólo en el aspecto dialéctico.

En tales circunstancias, a primeros de julio de 1967, el ministro indio del Interior, Chavan, declaraba ante el Parlamento que el Gobierno federal no podría abstenerse de llevar a cabo una enérgica acción para restablecer el orden debido a la «importancia estratégica» de la región. Efectivamente, el distrito de Naxalbari se encuentra situado en un punto neurálgico de la geografía india, puesto que se halla en una faja de una veintena de kilómetros que separa el Pakistán oriental de Assam, del Nagaland y de la NEFA. En esas condiciones, la permanencia de la región en manos no gubernamentales suponía un peligro vital para el país, que Nueva Delhi no estaba dispuesta a tolerar. Pero el Gobierno del Estado vacilaba en hacer uso de la fuerza, contentándose con enviar un ultimátum a los revoltosos conminándoles a comparecer ante la policía el 5 de julio. Al expirar dicho plazo, sin resultados positivos, se producían tormentosos debates en el seno del Gabinete entre aquellos ministros partidarios de enviar la policía al asalto de las «zonas liberadas» y quienes sostenían la tesis de que era necesario llegar a un entendimiento con los amotinados. Tampoco el Gobierno federal, pese a la advertencia de Chaván, se decidía a actuar por temer que una intervención del poder central provocase reacciones hostiles en Bengala y por ello, en espera de las decisiones del Gabinete bengalí, se limitaba a dirigir a Pekín una severa nota de protesta exigiendo el cese inmediato de las emisiones radiofónicas chinas que alentaban a los rebeldes. Pero el inmovilismo gubernamental tenía por consecuencia alentar a los insurrectos que aumentaron su radio de acción atacando, a mediados de julio, el puesto de policía de Raimotijote. Más de tres mil hombres armados participaron en el asalto. Este suceso produjo inmensa conmoción ya que parecía indicar un abierto desafío a la autoridad. La India, pues, se encontraba abocada a combatir unas guerrillas comunistas análogas a las que, desde hace años, se encontraban en pie de guerra en Birmania, Tailandia y demás países del Sudeste asiático. La perspectiva resultaba desalentadora después de estar empeñada en otra cruenta lucha contra las tribus secesionistas (Nagas y Mizo) en aquella neurálgica región de los confines del Himalaya. No obstante, el asalto a Raimotijote sacaba de sus dudas al Gobierno bengalí que se decidió, por fin, a enviar nutridos contingentes de policía

contra las «zonas liberadas» que se entregaban sin resistencia. Antes de que volviese la región al control gubernamental los más altos dirigentes de la revuelta escapaban a los montes seguidos de sus más conspicuos partidarios.

El grave incidente de Naxalbari, aunque liquidado, no dejaba de tener amplias repercusiones. En el plano político producía la escisión del partido comunista pro chino en dos organizaciones, enfrentadas desde entonces, el partido comunista marxista y el partido marxista-leninista (llamado en lo sucesivo «naxalista» en razón de haber mantenido la lucha armada en Naxalbari). Ambas organizaciones, junto al partido comunista ortodoxo o pro soviético, polarizaban las tendencias bien distintas en que habían cristalizado las diferencias internas o ideológicas. La segunda repercusión consiste en que el ejemplo de Naxalbari, pese a su rápido declive, se mantiene firme en unas masas campesinas paupérrimas ansiosas de repetir el experimento. En realidad, aunque Naxalbari fuese ocupado por la policía, las bandas armadas no desaparecieron, ya, de Bengala aunque sus movimientos adoptasen las características guerrilleras de los golpes de mano esporádicos. Como consecuencia de su actitud, el partido maoista había atraído a sus filas a una tercera parte del total de militantes comunistas de Bengala.

En vista del prometedor panorama, la actividad de los dirigentes naxalistas aumentaba a un ritmo vertiginoso. En diciembre de 1968 se sabía que habían creado cincuenta «bases rojas» en ocho estados de la Federación india para entrenar a los campesinos en las tácticas de guerrillas y fomentar una revolución armada en el país. En un documento secreto circulado a sus militantes, reclamaba la formación de unidades compuestas de obreros, campesinos y estudiantes, así como la creación de centros para el estudio del pensamiento maoista. La rebeldía se extendía con éxito fulgurante. En noviembre de 1969, el movimiento armado de los campesinos maoistas en el distrito de Midnapoore (Sudceste de Bengala occidental) se extendía ya en un frente de 80 kilómetros y sus guerrilleros habían asesinado, en dicha región selvática, a una docena de propietarios durante sus «operaciones de exterminio contra los enemigos de clase en las regiones rurales».

La rebelión se extendía ante la apatía gubernamental. Todas las llamadas a restablecer el orden eran desoídas por el ministro del Interior del Estado, el comunista Basu, que se limitaba a criticar a los naxalistas acusándoles de ser «aventureros». Mientras tanto nutridos efectivos rebeldes eran instruidos, en campos especiales de Bengala y Bihar, y dirigidos por estudiantes maoistas del Presidency College de Calcuta. Se sabía que la principal base maoista india

se encontraba en una región a caballo entre los Estados de Andhra y Orissa, llamada Srikakulam, desde donde se extendía el movimiento hasta los contrafuertes del Himalaya. Los actos de terrorismo trascendían de las zonas rurales ya que los naxalistas atacaron diversos establecimientos universitarios, escuelas, bibliotecas, salas de espectáculo, transportes comunitarios, etc. llegando hasta a quemar manuscritos de Gandhi «el padre de la patria». Sus actividades terroristas trascendían de Bengala puesto que se habían extendido a otros Estados, como Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Kerala y Assam estableciendo conexión, en el último de ellos, con los movimientos rebeldes Naga y Mizo, que también están ayudados por Pekín.

Pero su principal arraigo se encontraba en Bengala donde su acción es decisiva. Este Estado, como consecuencia de la revuelta naxalista, se hallaba sumido en la inestabilidad política y esta situación favorecía las actividades insurreccionales.

El 24 de febrero de 1970 se cumplía el año de existencia de la coalición de 14 partidos de izquierda que se hallaba en el poder en Bengala Occidental. Resultaba increíble que hubiera podido mantenerse dicha coalición ante las constantes disensiones y luchas internas promovidas por los contrapuestos intereses de tan numerosas organizaciones. En el curso de ese año se habían difundido constantes anuncios de ruptura y, como consecuencia de estas diferencias, la actividad del Gobierno salida de esa coalición, estaba semiparalizada. El jefe del Gobierno, Mukherjee, denunciaba en términos exaltados los desórdenes provocados por los partidos marxistas asociados a la coalición cuyos representantes poseían importantes carteras (Interior, Agricultura, Educación) en el Gobierno del Estado aprovechando esos cargos para reforzar su influencia entre las masas obreras y campesinas, así como entre los funcionarios de los Departamentos a su cargo. La situación resultaba insostenible porque las exhortaciones a la moderación de Mukherjee eran desatendidas por los ministros que predicaban la violencia revolucionaria, especialmente el ministro del Interior, el marxista Basu, y cuya labor sediciosa había cristalizado en la formación de un verdadero ejército, formado por milicias perfectamente instruidas y disciplinadas, que apoyaba la acción subversiva de los campesinos lanzados a la incautación de las tierras y el asesinato de los propietarios, considerados como «enemigos de clase». El resultado de esta acción podía concretarse en cifras escalofrantes: en el período enero-octubre de 1969 se habían computado 574 asesinatos por las bandas «naxalistas» y se habían producido 739 asaltos y expoliaciones. Toda Bengala estaba sumida en el caos revolucio-

nario y el Gobierno apenas mantenía una ficticia apariencia de autoridad. Incluso la policía se encontraba profundamente minada por la propaganda subversiva y, en tales condiciones, la situación se hacía prácticamente incontrolable. El Congreso de Bengala (del Nuevo Congreso) al que pertenece Mukherjee, consciente de la ineficacia de sus esfuerzos para restablecer el orden, le aconsejaba dimitir antes del 16 de marzo evitando la complicidad, siquiera fuese nominal, en una situación que no podía afrontar debido a su inferioridad en el Parlamento donde sólo poseía 33 diputados frente a 30 del partido comunista ortodoxo y 90 del partido comunista-marxista. El corresponsal del *Hindustan Times* en Calcuta escribía que «resulta difícil verificar un balance completo de la situación en las aldeas puesto que el propio Gobierno local no posee una imagen correcta. Existe un sentimiento general de inseguridad en el campo». El sombrío panorama se agravaba por las querellas y enfrentamientos de las diversas organizaciones comunistas—el partido comunista (ortodoxo), el comunista-marxista y el marxista-leninista (naxalistas)—que pretenden imponerse absolutamente. Toda esta atmósfera de confusión repercutía causando inmensos daños a la economía, los capitales huían y los industriales reducían sus actividades o las transferían a otros Estados. Las bandas sediciosas «naxalistas» poseían abundante armamento de fabricación china. Y corroborando esas informaciones, en marzo, el ministro del Interior, Chavan, revelaba a la Cámara que el Gobierno poseía informes fidedignos que acreditaban la entrada de «pequeñas cantidades» de armas y municiones chinas en Bengala occidental destinadas a los «naxalistas», que están apoyados abiertamente por Pekín para mantener la lucha armada campesina.

En un desesperado intento por salvar el Gobierno de coalición, Mukherjee propuso una nueva distribución de las carteras ministeriales. Esta maniobra, destinada a eliminar a Jyoti Basu del ministerio-clave del Interior, fracasaba ante la negativa de los marxistas a consentir ningún reajuste. Simultáneamente, los otros integrantes del Frente Unido se negaban a aceptar una propuesta de los marxistas para crear en el ministerio del Interior una Comisión Consultiva interministerial. No habiendo logrado sus objetivos y cediendo a los consejos de su partido, Mukherjee dimitía, el 16 de marzo, de su puesto de jefe del Gobierno de Bengala occidental. Su dimisión provocaba la caída del Gobierno de coalición que había durado trece meses. En sus declaraciones a la prensa justificaba su decisión en la circunstancia de su incapacidad para «proteger al pueblo contra los elementos antisociales». La desaparición de la coalición daba la señal para la revuelta general. Los Sindicatos controlados

por el partido comunista-marxista declaraban la huelga general—en contra de las consignas del partido comunista ortodoxo, y de la mayoría de los sindicatos—, de veinticuatro horas para el día siguiente, 17 de marzo, y en los choques que se produjeron entre los adictos a los diversos partidos durante dicho día morían 37 personas mientras que más de 700 resultaban heridas. El diario de Calcuta *The Statesman* escribía que jamás una huelga había provocado tantas violencias en Bengala. Más de cuarenta bombas se descubrían en diversas localidades y todo hacía presagiar los peores acontecimientos en el Estado más turbulento de la India o la inmediata entrada en acción del Ejército, que en Bengala se ha visto obligado, seis veces en tres años a restablecer el orden. Nueva Delhi presionaba para un arreglo político de la situación, pero, en vista de que ningún partido político podía, o quería, asumir la responsabilidad de formar Gobierno, el presidente de la República, Giri, imponía en Bengala occidental, el 19 de marzo, la «regla presidencial» que colocaba al Estado bajo la administración directa de Nueva Delhi. La Asamblea bengalí era «suspendida», aunque no disuelta, con lo que se dejaba abierta la puerta para que, en el futuro, los partidos pudiesen ponerse de acuerdo y formar un Gobierno antes de las elecciones generales de 1972. El 22 de marzo se reproducían los desórdenes en los suburbios de Calcuta cuando 2.500 comunistas se manifestaban contra la decisión de Nueva Delhi de administrar Bengala. Como consecuencia de los choques perdían la vida cuarenta personas. Mientras tanto proseguía la ocupación de tierras por parte de las bandas armadas naxalistas no sólo en Bengala, sino en otros siete Estados más de la Federación. En los meses de noviembre de 1969 a agosto del año actual habían sido asesinados por estas bandas 112 propietarios y se hallaban detenidas casi diez mil personas sospechosas de participar en los actos terroristas. Ante la gravedad de la situación, Indira Gandhi estimulaba a una fuerte acción que desmantelase el partido naxalista y ordenaba que se acelerase la reforma agraria para privar de base a la campaña de ocupación ilegal de tierras. Así, el pasado 23 de agosto, Indira Gandhi declaraba en Calcuta que «es la extrema pobreza y no la violencia comunista la que amenaza más a la India».

Es decir, que después de tres años, el peligroso movimiento rebelde naxalista no ha logrado ser desmantelado, pese a la intervención directa del Gobierno federal en el asunto y que la acción terrorista que aquel preconiza se ha ido extendiendo a otros Estados de la Unión amenazando con crear en todo el país una situación revolucionaria. Este es un hecho tanto más grave por

cuanto tampoco ha sido resuelto el enfrentamiento con las tribus Mizo que prosiguen la lucha armada contra el Gobierno. La región de las colinas Mizo, cerca de Tripura, en el Estado de Assam, se ha convertido en un foco endémico de revuelta en el que las fuerzas armadas de Nueva Delhi carecen de posibilidades de restablecer el orden. Las incursiones de los comandos Mizo han causado durante los últimos años, varios centenares de muertos entre los soldados gubernamentales a costa de elevadísimas pérdidas en las filas guerrilleras. Y otro tanto sucede con los Nagas que se mantienen en lucha armada contra el Gobierno desde hace catorce años estando situado el núcleo de su rebelión en las altas montañas próximas a Kohima, la capital de Nagaland. A pesar de haber creado Nueva Delhi, en 1963, el Nagaland, aquellas tribus continúan la lucha porque exigen la total independencia y la separación de la India. Los combates, aunque esporádicos, son muy encarnizados. En uno sólo de dichos encuentros, ocurrido a primeros de junio de 1968 se produjeron 120 guerrilleros muertos. Estos se encuentran directamente apoyados por Pekín que les suministra armas y municiones así como entrenamiento militar en territorio chino. Como consecuencia del combate que hemos mencionado, el Gobierno indio dirigía a la China Popular una nota de protesta declarando que Nueva Delhi «no tolerará ninguna injerencia de ninguna especie en los asuntos internos de la India». Afirmaba que poseía «pruebas irrefutables» de los suministros bélicos chinos así como del entrenamiento que proporcionaba a dos mil nagas que se encontraban en China de los cuales cuatrocientos habían regresado al Nagaland a través de las selvas montañosas del Norte de Birmania. Meses después, en marzo de 1969, las tropas interceptaban otro grupo de 200 nagas cuando regresaban de China, terminado su entrenamiento militar, y lograban capturar al jefe rebelde, general Mowu Angami. Junto a estas luchas de carácter ideológico o secesionista, subsisten aquellos otros enfrentamientos, tradicionales en la India, causados por conflictos lingüísticos o religiosos de la heterogénea población del inmenso país. Así, refiriéndonos en este resumen, tan sólo a los últimos acontecimientos, tenemos que, a finales de septiembre de 1969, las comunidades hindú y musulmana de Ahmedabad, se enzarzaban en una furiosa batalla religiosa. El motivo de estas luchas consistió, según unas versiones, en que algunas vacas, sagradas para los hindúes, habían sido apedreadas por los musulmanes y varias mujeres eran molestadas cuando se dirigían al templo. Otros relatos afirman que los hindúes colocaron deliberadamente las vacas en el trayecto de un cortejo musulmán lanzándose a la lucha cuando fueron obligadas a apartarse. Acontecimientos similares se han

venido repitiendo a millares en la India durante muchos siglos y las consecuencias han sido montañas de cadáveres. En el caso concreto de Ahmedabad los resultados fueron diez días de sangrientos combates que originaron más de 500 muertos, miles de heridos, 3.000 detenidos, destrucciones innumerables y el paro de las industrias que ocasionó una pérdida de 45 millones de rupias. Y como colofón, el avivamiento de los recelos entre las dos comunidades, estimulados por los recuerdos de los trágicos acontecimientos y de las víctimas ocasionadas.

Las cuestiones administrativas, frecuentes en la protéica nación, son fuente constante de desórdenes. El último caso de este tipo ocurrido sucedió a finales de 1970 cuando el Gobierno federal decidía atribuir la ciudad de Chandigarh al Estado de Pundjab. Esta decisión desencadenó graves desórdenes en el Estado de Haryana donde el 31 de dicho mes se contaban siete muertos y 32 heridos en las manifestaciones para reivindicar dicha ciudad que administrativamente es un territorio de la Unión India al propio tiempo que capital de Haryana y del Pundjab. Indira Gandhi al adoptar su delicada resolución, cedía a las reclamaciones inquietantes de los sikhs, cuyo jefe político-religioso Sant Fateh Sing, amenazaba con inmolarse, después de una huelga de hambre, si la ciudad y algunas porciones de los Estados de Uttar Pradesh y Haryana, no eran cedidas, antes del 1 de febrero, al Pundjab. Para compensar esta cesión otorgaba a Haryana 114 poblados de una región particularmente fértil y algunas zonas rurales de los alrededores de Chandigarh, así como un donativo de cien millones de rupias y un préstamo de idéntico monto para que construyera su propia capital. Estas concesiones no han bastado para calmar el descontento que se mantiene larvado entre las masas populares. La decisión federal calmó las pasiones sikhs, exacerbadas por el hecho de que el Pundjab haya sido dividido en dos ocasiones: primero en 1947, cuando fue dividido el subcontinente indostánico entre la India y el Pakistán, y una segunda vez en marzo de 1966, cuando el territorio pundjabi fuera dividido, atendiendo a factores religiosos y lingüísticos, en dos Estados (Pundjab, de mayoría sikh y lengua pundjabi, y Haryana, de predominio hindú y lengua hindi).

En Pundjab, la inestabilidad procede de las agudas disensiones que mantienen las dos facciones rivales del partido sikh Akali Dal. El pasado mes de marzo estas disensiones provocaron la caída del Gobierno presidido por Gurnam Singh—que había permanecido en el poder durante trece meses—al no hallar ambas facciones una fórmula de compromiso respecto a la aplicación del impuesto sobre la riqueza agrícola y la fijación de límites a las propie-

dades agrícolas. Le sucedió su adversario Singh Badal que mantenía la coalición con el Jan Sangh, partido de extrema derecha hinduista, pero éste retiraba, poco después, a sus cuatro ministros al fracasar en sus intentos de que el hindi tuviese el mismo rango que el pundjabi. También Mysore y el vecino Estado de Maharashtra mantienen vivo un conflicto que es á provocando sensibles desórdenes. A su vez las Cámaras legislativas de Bihar se han visto obligadas a aplazar sus trabajos al encontrarse paralizada por incesantes tumultos. Otro tanto ha sucedido en el importante Estado de Uttar Pradesh—que fue el feudo de Nehru y de Shastri y en el que nació Indira Gandhi— desgarrado por las querellas partidistas.

Completando el panorama, pueden mencionarse los vandálicos disturbios estudiantiles—de raíz ideológica encubierta bajo diversos pretextos—que causan estragos en la India, al igual que sucede en los más diversos países del mundo. Así, a mediados de abril de 1970 los disturbios estudiantiles se extendían por el centro y el norte de la India. Como consecuencia, se tenía que imponer el toque de queda en Satna, en el Estado de Madhya-Pradesh, y los estudiantes maoistas devastaban la Universidad de Jadavpur, al sur de Calcuta, profiriendo gritos de «abajo la cultura yanqui». La masa estudiantil se encuentra, en una parte sustancial, polarizada hacia la extrema izquierda y sus conexiones con los movimientos rebeldes maoistas resulta evidente.

Tratando de corregir las perturbaciones producidas por las aspiraciones tribales, el Gobierno de Indira Gandhi viene adoptando una serie de medidas para satisfacer sus deseos en la medida de lo posible. Así el 24 de diciembre de 1969, el Parlamento indio adoptaba una ley que reorganizaba el estado de Assam, mediante la cual tres distritos montañosos accedían a la autonomía interna, aunque permaneciendo en el seno del Estado. Tales distritos son los de Khasi, Jaina y Garo-Hills que se reagrupan en el Estado de Meghalaya (cuya creación fue aprobada por el Parlamento indio el 25 de octubre de 1969) cuya extensión será de 22.000 kilómetros cuadrados y una población de 800.000 almas. Con ello se accede a las aspiraciones de estas tribus montañosas que desean mantener sus particularidades tradicionales. Meghalaya dispone de una Asamblea legislativa propia, que ha sido ya elegida, y en la que el partido *All Party Hill Leaders Conference* posee la mayoría.

De todas formas, Indira Gandhi se ha visto enfrentada, durante su mandato gubernamental, a un duro combate en tres frentes simultáneos: el de los graves problemas que amenazan el futuro del país, la hostilidad de los partidos políticos adversos y la enemistad declarada de un influyente sector de su propio

partido, el Congreso. Su permanencia en el poder sólo ha sido posible mediante una lucha titánica con tan poderosos adversarios. El Swatantra afirma que «no hay nada peor para la seguridad y la estabilidad del país que la permanencia de la señora Gandhi en el poder». El viejo Congreso la califica de «fascista» y «autócrata» y le atribuye el «declive» de la India.

Consciente de la necesidad de inyectar nueva savia en las viejas estructuras del Congreso para aproximarlos a las masas de las que se encontraba en trance de divorcio, Indira Gandhi adoptaba, últimamente, una postura disidente, en gran modo, de la patrocinada por los viejos líderes congresistas. La trascendencia de estas discrepancias internas en el seno del partido gubernamental, surgió a la luz pública con ocasión de la elección presidencial, en agosto de 1969, cuando era elegido presidente de la India V. V. Giri, candidato de la señora Gandhi, que derrotaba al candidato del partido del Congreso, Reddy, en una reñida lucha electoral. Este acontecimiento señalaba, de forma ostensible, una actitud de Indira Gandhi de abierta independencia, desafío más bien, ante su propio partido. Al no aceptar las decisiones impuestas por los dirigentes del Congreso, es decir, al no sujetarse a la disciplina del partido, Indira Gandhi se exponía a graves determinaciones. Para la jefe del Gobierno, el Congreso se estaba distanciando de las masas populares debido a su inercia y a la vetustez de sus cuadros directivos, formados por veteranos políticos conservadores—el presidente Nijalingappa; Kamaraj, de Madras; Patel de Bombay; Ghosh, de Bengala occidental, etc.—incapaces de hacer evolucionar al partido acomodándole a las nuevas corrientes ideológicas y a las realidades de la India contemporánea. Es preciso recordar que el Congreso tiene ochenta y cinco años de existencia y muchas de sus estructuras están anquilosadas por no haber sido remozadas. Por otra parte, el tratarse de una coalición de fuerzas heterogéneas, más bien que de un partido político, le resta eficacia, porque sus decisiones tienen que acomodarse, fundamentalmente, a líneas muy conservadoras para no lesionar los intereses de las organizaciones que en él se integran.

Tras el asunto Giri, Indira Gandhi proseguía su enfrentamiento con el Congreso destituyendo a su ministro de Finanzas, Desai, que contaba con el apoyo de los grandes caciques del partido, y, después, de otros cinco ministros. Nacionalizaba los grandes bancos y prometía acelerar la reforma agraria. Tales decisiones, así como su violenta carta del 4 de noviembre a Nijalingappa acusándole de reaccionario, la situaban en una vía incompatible con las directrices sustentadas en el partido del Congreso. En consecuencia, el presidente

del mismo, Nijalingappa, hacía aprobar una moción expulsando a Indira Gandhi del partido por haber perdido su confianza. No obstante, la jefe del Gobierno contraatacaba con éxito al conseguir que, al día siguiente, el grupo parlamentario congresista aprobase una resolución—respaldada unánimemente por los 330 diputados asistentes—declarando «nula y sin justificación» la expulsión y afirmando que: «la primer ministro continúa siendo la dirigente del partido y goza de la confianza de éste». Esta reunión fue boicoteada por 99 diputados hostiles a la señora Gandhi por lo que el ministro de Justicia, Menon, declaraba al término de la reunión que los parlamentarios presentes representaban al «verdadero» Congreso y que los ausentes formaban la «disidencia».

De esta forma quedaba consumada la ruptura en el seno del Congreso. En el Parlamento, si bien Indira Gandhi arrastraba tras de sí la mayor parte de los diputados congresistas, había perdido la mayoría absoluta. Para gobernar se veía precisada a contar con el apoyo del partido comunista prosoviético, el partido drávida de Madrás y los independientes lo que disminuye su libertad de acción, y, en razón del escaso arraigo en el conjunto del país, de ambas organizaciones, limita su proyección impidiéndole un plan a escala nacional. A mediados de diciembre el partido del Congreso, reunido en sesión plenaria, decidía la exclusión de Indira Gandhi y de sus partidarios por «hacer peligrar la estabilidad política», según declaraba Nijalingappa, y demostrar «tendencia al poder personal absoluto, aliándose a obscurantistas religiosos y elementos comunistas, así como excitar la histeria de las masas». Estas reuniones fueron boicoteadas por la señora Gandhi y sus partidarios que pocos días después celebraban sus propias reuniones en Bombay. El resultado de ambas fue la escisión del partido en dos: el Nuevo Congreso de Indira Gandhi y el Congreso, que continúa bajo la inspiración de sus antiguos dirigentes.

El 28 de marzo de 1970 al finalizar las elecciones para la renovación de un tercio de los miembros de Rajya Sabha (Consejo de los Estados) se registraba la pérdida de quince escaños por el partido gubernamental de Indira Gandhi, el Nuevo Congreso. Por el Contrario, el primitivo partido del Congreso mantenía sus posiciones y la reforzaban los dos movimientos más radicales, el Jan Sangh, de extrema derecha, y el partido comunista-marxista, que obtienen, respectivamente, 15 y 8 escaños. El Swatantra consiguió 13 representantes mientras que el partido comunista ortodoxo logró diez. Estos resultados significan una derrota, siquiera sea limitada, del partido gubernamental que no ha logrado ningún puesto en Tamil-Nadu, Orissa, Gujarat ni Mysore. Des-

TRIBULACIONES EN LA UNIÓN INDIA

pués de estas elecciones parciales el partido gubernamental—a consecuencia de su escisión—ha visto descender sus escaños de 103 a 88 en un total de 240 que componen la segunda Cámara. El viejo Congreso con sus 43 representantes, ha pasado a la oposición. Por otra parte, el partido gubernamental sólo posee 222 escaños de los 523 que componen la Lok Sabha, Cámara del Pueblo. En estas precarias condiciones resulta muy difícil llevar a cabo un vigoroso plan gubernamental, el que precisamente requiere la India en estos momentos cruciales, y por estas dificultades, hasta ahora, el Nuevo Congreso se ha limitado a adoptar un programa de circunstancias ya que, por su debilidad numérica en el Parlamento, la supervivencia del Gobierno, depende de apoyos circunstanciales y aleatorios. Así, el programa aprobado en Bombay tan sólo especifica medidas susceptibles de despertar el apoyo popular: nacionalización del comercio al por mayor de los productos agrícolas, importaciones de materias primas y seguros generales, aplicación de reformas agrarias antes de 1971. Sólo la consolidación de su partido en las futuras elecciones de 1972 permitirá a Indira Gandhi llevar a cabo una decidida política que corrigiese los grandes defectos sociales que son uno de los factores principales de la inestabilidad de la Unión.

Mientras tanto, se agudiza otro de los problemas capitales de la colosal nación cual es el del fabuloso crecimiento demográfico que, dificulta la necesaria acción de elevación del nivel de vida. La población de la India pasó de 360 millones de habitantes en 1951 a 520 en 1968. Tratándose de un país en vías de desarrollo, en el que el problema alimenticio alcanza dantescas dimensiones, esta enorme afluencia anual de nuevas bocas anula todos los esfuerzos que Nueva Delhi viene aplicando para fomentar la producción. Hace más de quince años que el Gobierno viene aplicando una experiencia de control de nacimientos, basada, en su primera fase, principalmente en recomendaciones que no tuvieron aceptación. En 1967 se comenzó a aplicar la esterilización voluntaria acompañada de interesantes estímulos económicos a quienes se sometían a ella. A finales de septiembre de 1968, cinco millones de personas se habían esterilizado ya. Estas cifras, sin embargo, son muy débiles frente al total de la población y, por otra parte, en la mayoría, son padres o madres que tenían, ya, antes de ser esterilizados, una familia numerosa. En tales circunstancias, el éxito del plan gubernamental dista mucho de haberse logrado. Con ello, subsiste el fantasma del hambre, crónicamente instalado en el país, y las consiguientes perturbaciones sociales. Un solvente informe técnico afirmaba en 1959 que para alimentar a su población, en 1966 necesitaba contar

con una producción de cereales de 110 millones de toneladas. En aquella fecha se alcanzaban algo más de 60 millones de toneladas. Pero las cifras previstas distan mucho de haberse conseguido, ya que en 1967-68 la cosecha alcanzó 95 millones. Subsiste, pues, un déficit que tiene que ser cubierto con importaciones del extranjero cuando la situación financiera, comprobada con el presupuesto presentado el pasado 28 de febrero por Indira Gandhi al Parlamento, no es satisfactoria ya que alcanza un déficit de 3.500 millones de rupias. Se hace necesario, por ello, volcar enormes recursos para favorecer el progreso agrario. No obstante, esta acción gubernamental se ve entorpecida por los crecientes gastos militares que implica la atención a los dos frentes exteriores que le han amenazado militarmente: el pakistaní y el chino. Este último se halla en primer plano de la preocupación popular después de los gigantescos progresos técnicos que desembocaron en la posesión por Pekín de la bomba de hidrógeno. Aunque Indira Gandhi mantiene una política de serenidad no puede evitar que amplios e influyentes sectores se sientan angustiados y reclamen drásticas medidas. Así, a primeros de año, el Gobierno se veía en la precisión de aceptar el estudio del costo de la realización de una bomba atómica, ante la firme petición de la comisión parlamentaria de energía atómica que solicitaba su fabricación en la India ante el preocupante aumento del potencial chino. Un economista indio formado en Harvard, Swamy, reforzó la postura de los partidarios de la bomba al afirmar en un informe que la fabricación de armamento nuclear es compatible con los medios que posee la India. En dicho informe propone un programa quinquenal, con un costo total de unos mil millones de dólares. Resulta evidente que desviar cifras tan colosales al terreno del armamento es suficiente para comprometer seriamente el desarrollo económico y social que la India necesita lograr urgentemente si aspira a superar esta etapa de tribulaciones internas que amenazan su futuro.

JULIO COLA ALBERICH.